

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

| APELACIÓN - SENTENCIA |   |
|-----------------------|---|
| DEMANDANTE            | WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO   |
| DEMANDADOS            | COLPENSIONES y AFP PROTECCIÓN S.A.<br>MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO<br>PÚBLICO   |
| RADICADO              | 05001-31-05-022-2017-00456-01   |
| MAGISTRADA PONENTE    | MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  |
| TEMA                  | Ineficacia en acto de traslado de régimen<br>pensional, con status de pensionado en<br>régimen de ahorro individual con solidaridad |
| DECISIÓN              | Confirma  |

*Medellín, dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021)*

*Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual*

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el

traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO** en contra de **COLPENSIONES** y de la **AFP PROTECCIÓN S.A.**, y dentro del cual se integró la Litis con el **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 031**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del demandante contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 7 de junio de 2019.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor **WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO** nació el 6 de septiembre de 1946, cumplió los 60 años de edad en esa misma fecha del año 2006, y se encuentra inmerso en el régimen de transición pensional.

Adujo que inicialmente se desempeñó al servicio de las **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, sin cotización al ISS, entre el 2 de octubre de 1973 y el 28 de octubre de 1980, lo propio ocurrió al servicio de la Universidad de Antioquia entre el 13 de abril de 1966 y el 30 de septiembre de 1973, para posteriormente afiliarse al entonces Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desde el 24 de septiembre de 1980 hasta junio de 1996, y luego

trasladarse a PROTECCIÓN S.A. desde julio de 1996 donde realizó cotizaciones efectivas hasta agosto de 2001.

Se duele que el asesor comercial que lo visitó para suscribir el traslado a PROTECCIÓN S.A., no le haya brindado una completa y cabal asesoría conforme a la cual le hubiere hecho el respectivo énfasis sobre su condición de beneficiario del régimen de transición pensional y las consecuencias desfavorables a que se vería abocado al trasladarse de régimen pensional.

Agregó que, encontrándose afiliado al RAIS y una vez reunió el capital necesario para pensionarse, el 23 de agosto de 2001 solicitó a PROTECCIÓN SA el reconocimiento de su pensión, la cual le fue reconocida mediante la Resolución 2001-3369, bajo la modalidad de retiro programado, en monto mensual de \$520.422, a partir del 1º de septiembre de 2001.

En punto a este reconocimiento afirmó que estas condiciones pensionales no satisficieron sus expectativas, al no consultar su realidad socio económica y no alcanzar a cubrir sus necesidades de mínimo vital, situación que atribuye a la deficiente información que le fue suministrada por el agente adscrito al fondo de pensiones privado.

Subrayó que, de haber permanecido en el régimen de prima media con prestación definida, su pensión habría sido superior a la reconocida por PROTECCIÓN S.A., y no se vería abocada a estar disminuyendo con el paso del tiempo, como ocurre tratándose de una pensión en retiro programado.

Refirió que con esta situación se le han ocasionado perjuicios patrimoniales, los cuales considera deben ser indemnizados por PROTECCIÓN S.A. por haberle hecho incurrir en error.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que se declare que al actor le asiste derecho a retornar al régimen de prima media con prestación definida, por

contar con más de 750 semanas a la entrada en vigencia del sistema pensional, conforme a lo establecido en la Sentencia SU 130 de 2013 de la Corte Constitucional, y que, en consecuencia, se condene a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES el monto de los aportes depositados en la cuenta de ahorro individual del actor, y a esta última entidad, a recibirlos y reconocer la pensión de vejez al demandante, con fundamento en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, junto con el respectivo retroactivo pensional, inclusivo de las mesadas pensionales ordinarias y adicionales, con la aplicación del respectivo descuento por lo ya pagado a título de mesadas pensionales por PROTECCIÓN S.A.; la indexación de las sumas objeto de condena y las costas procesales.

#### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales (folios 89 y ss. del expediente).

COLPENSIONES respondió la demanda, a través de escrito visible a folios 89 y siguientes del expediente, mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda; aceptó la edad del demandante y su traslado al RAIS, negando los demás hechos, y; formuló las excepciones perentorias de *“FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN DE LAS CONDENAS, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, BUENA FE e IMPOSIBILIDAD DE CONDENAS EN COSTAS”*.

PROTECCIÓN S.A. describió el traslado de esta acción, según escrito visible a folios 115 y siguientes del expediente. A través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; aceptó el status de pensionado del actor, negando los demás hechos de la acción, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, DEBIDA CAPACITACIÓN DE LOS ASESORES, ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE Y PERSONALIZADO A LOS AFILIADOS, NO INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, RATIFICACIÓN*

*DE LA VOLUNTAD, INCUMPLIMIENTO AL DEBER PROPIO DE INFORMARSE y AUSENCIA DE LUCRO CESANTE*”, entre otras.

La entidad integrada por pasiva al juicio MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO allegó contestación a la demanda, visible a folios 164 y siguientes del expediente.

A través de la misma informó que ese ministerio desconoce las circunstancias en que se produjo el traslado de régimen del demandante, y si existió o no asesoría; negó los hechos de la demanda; se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; en punto al bono pensional expresó que el 6 de septiembre de 2008 se redimió el mismo cuando el actor cumplió los 62 años de edad, indicó que el mismo no puede ser anulado, modificado o reintegrado, y; formuló las excepciones de *“LA OFICINA DE BONOS PENSIONALES NO FUNGE COMO ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL, NI FONDO, NI ADMINISTRADOR PENSIONAL, BUENA FE y la EXCEPCIÓN GENÉRICA”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 7 de junio de 2019, el Juez de conocimiento absolvió a las demandadas de todas las pretensiones de la demanda, declarando probada la excepción de PRESCRIPCIÓN.

Sus argumentos consistieron en que, si bien PROTECCIÓN S.A. tenía la obligación de haber brindado una cabal y absoluta asesoría al demandante, no probó haberlo hecho, y siendo pertinente aplicar la inversión de la carga de la prueba, lo que en principio le permitiría al actor acceder a la ineficacia del acto de traslado, en este caso se habría configurado la prescripción extintiva, ya que habían transcurrido más de 14 años desde que el actor alcanzó el status de pensionado, de lo cual concluyó que, si bien la ineficacia no prescribe, tratándose del caso particular donde el actor accedió a la pensión en el RAIS, sí se configuraba la misma, ya que se había presentado un nuevo acto constitutivo

de reconocimiento pensional frente al cual e había dejado transcurrir el tiempo, configurándose el fenómeno extintivo para cualquier reclamación.

Condenó en costas procesales al demandante, y en favor de PROTECCIÓN S.A. y de COLPENSIONES. Respecto del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO no profirió condena ni a favor ni en contra.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la apoderada judicial del señor WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO, quien sustentó la alzada expresando que, de conformidad a la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia (plasmada entre otras, en las sentencias SL 8397 de 1996, SL 29479 de 2008, SL 12715 de 2014 y SL 1688 de 2019), al encontrarnos frente a un derecho inalienable e indisponible a la seguridad social, la prescripción no se configura en asuntos donde se encuentre relacionada la formación del derecho pensional.

Agregó que la jurisprudencia de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia ha decantado su postura en cuanto a que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, lo cual evidentemente se hace extensivo al tema de la ineficacia.

A partir de estas consideraciones solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la misma.

### **Alegatos de Conclusión:**

En la debida oportunidad procesal, el apoderado judicial del demandante presentó alegatos de conclusión. A través de los mismos, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, reiterando lo planteado en el recurso de

alzada, en torno a la línea jurisprudencial de la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia sobre la imprescriptibilidad de la ineficacia pensional, por ser un tema íntimamente relacionado con la formación del derecho pensional.

Por su parte, la apoderada judicial del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO hizo lo propio y presentó alegaciones, en la que solicitó se confirme la decisión de primera instancia, teniendo en cuenta la sentencia de unificación dictada por esta corporación el 14 de agosto de 2019, en la que se decantó la improcedencia de declarar la ineficacia tratándose de personas que ya hubieren accedido a la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

PROTECCIÓN S.A., presentó alegatos de conclusión a través de su apoderada judicial, solicitando la confirmación de la sentencia de primera instancia. A través de tales alegatos, argumentó que el actor se trasladó de manera voluntaria al RAIS y alcanzó el reconocimiento de la pensión de vejez de manera anticipada, evidenciándose su mala fe al interponer esta demanda.

Se apoyó en postura jurisprudencial para solicitar que no se acceda a las súplicas de la demanda, dada la improcedencia de declarar la ineficacia cuando se trata de una persona pensionada.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional.-**

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por la apoderada judicial del demandante, que comprende determinar si hay o no lugar a declarar ineficaz el acto de traslado del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad, teniendo en cuenta que el actor se encuentra pensionado por dicho régimen desde el año 2001, habiendo accedido a la pensión de vejez de forma anticipada.

Si bien la demanda inicial fue planteada como un tema de recuperación del régimen de transición en cualquier tiempo bajo los presupuestos de la Sentencia SU-130 de 2013, es evidente que el A quo no siguió ese delineamiento para resolver la Litis, en tanto partió del análisis legal y jurisprudencial de la Ineficacia de régimen pensional.

Esta Sala será consecuente con ese enfoque del juicio jurídico de primera instancia, como quiera que no es este un tema de recuperación de la transición, sino que toda la fundamentación fáctica del libelo introductor comporta un tema que controvierte la ineficacia del acto de traslado suscrito por el actor del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad.

**Ineficacia en traslado de régimen pensional:**

En términos generales, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y luego de haber trazado una línea jurisprudencial desde el año 2008 (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008), fue decantando su posición a través del desarrollo de instituciones como *“el buen consejo”*, *“la inversión de la carga de la prueba”*, además de avanzar en la consolidación del concepto propio de la seguridad social, al pasar de entender que, más que tratarse de una simple nulidad, lo que se presentaba con la ausencia de información, era la Ineficacia, como sanción propia del acto



jurídico en estos temas (Sentencias SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017), concluyó en una pacificada jurisprudencia (**sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019**), que en la actualidad continúa manteniendo su mismo sentido (Sentencia SL 3199 de 2020 entre otras).

Esta línea jurisprudencial, parte de destacar, que el deber de información es ineludible; que existe y se hace exigible, desde la propia creación de los regímenes pensionales que introdujo la Ley 100 de 1993, sin importar que, si bien se han promulgado normas más recientes en las que se ha desarrollado el tema (numeral 1º del Artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el Artículo 23 Ley 795 de 2003; Artículo 9 de la Ley 1328 de 2009 y Decreto 2555 de 2010), se trata de una obligación que deriva de la propia Ley 100 de 1993, que promulgó la existencia de los dos regímenes pensionales, y el derecho a la libre elección.

También ha quedado claro, que a nivel procesal, el tema se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Es preciso, asimismo, tener en cuenta, que para la Sala de Casación Laboral (SL 1688 de mayo de 2019), *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte*

*interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”.*

Esta postura es consecuente con los postulados que rigen en materia social, conforme a los cuales en el juicio jurídico sobre los derechos de los trabajadores y los afiliados a la seguridad social, resulta más relevante la realidad que los formalismos; la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrado la formación del derecho a la pensión, y; el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, es el primero, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que eventualmente exista movilidad entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

Haciendo un recuento de toda la línea jurisprudencial sobre la ineficacia, para llegar al estado actual de la jurisprudencia sobre el tema, es pertinente citar las providencias del órgano judicial de cierre Corte Suprema de Justicia sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217 y SL782 de 2021.

Para la Corte Suprema de Justicia, el deber de información a la persona que aspire a trasladarse de régimen pensional, consiste en una completa *“descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas*

*objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado”.*

No obstante ser un tema pacífico la generación de la consecuencia jurídica de la ineficacia cuando el fondo privado no prueba en el juicio que verdaderamente suministró una real y absoluta asesoría al afiliado al momento del traslado, ha sido clara la jurisprudencia en el sentido que, cuando se trata de una persona que ya alcanzó el derecho a la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad y disfruta de ella, *“es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico que no es razonable revertir cuando se acredita la ineficacia del traslado, pues ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto, generando un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones –improcedencia de la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado”* (Sentencia SL373 de 2021).

Esta corporación ha sentado su postura en ese mismo sentido, y fue así como a través de la sentencia de unificación del 14 de agosto de 2019, dentro del proceso con radicado 05-001-31-05-007-2015-01295, expuso que no es procedente la ineficacia de traslado para pensionados, precisamente porque la carencia de información al afiliado, se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico de pensionado, sin dejar de lado que, acceder a declarar ineficacia cuando ya se ha alcanzado la pensión afectaría la sostenibilidad financiera del sistema, toda vez que con esta decisión pueden verse afectados terceros, como lo es el inversionista del bono pensional, el cual realizó un acto jurídico válido y totalmente legítimo.

La postura de esta corporación resulta consecuente con la distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, diferenciación necesaria a efectos de entender que la carencia de información que existía en la afiliación cuando se tenía la condición de afiliado pasa a un segundo plano cuando se accede a los beneficios en el RAIS por

parte del asegurado y merced a ello celebra un nuevo acto jurídico que consolida su status pensional bajo las reglas propias del régimen.

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

### **CASO CONCRETO**

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 20 y siguientes del expediente, se advierte que el señor WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO, inicialmente se desempeñó al servicio de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, sin cotización al ISS, entre el 2 de octubre de 1973 y el 28 de octubre de 1980, lo propio ocurrió al servicio de la Universidad de Antioquia entre el 13 de abril de 1966 y el 30 de septiembre de 1973, para posteriormente afiliarse al entonces Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desde el 24 de septiembre de 1980 hasta junio de 1996, y luego trasladarse a PROTECCIÓN S.A. desde julio de 1996 donde realizó cotizaciones efectivas hasta agosto de 2001, para pasar a disfrutar de la pensión de vejez, la cual le fue reconocida por dicha AFP mediante la Resolución 2001-3369, bajo la modalidad de retiro programado, en monto mensual de \$520.422, a partir del 1º de septiembre de 2001.

Revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión absolutoria, las mismas consultan la línea jurisprudencial vigente sobre este tema, ya que el status jurídico de pensionado que ostenta el señor WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO desde septiembre de 2001 no puede ser una situación que se deba desconocer o ser revertida, en tanto se encuentra jurídicamente consolidada.

No se trataría solo de evaluar la falta de información al momento del traslado, sino que el nuevo status de pensionado implica un juicio que comprende otras variables financieras y de riesgo económico que no solo comprenden al actor y a la administradora de pensiones. En primer lugar, acceder a la ineficacia en estos términos constituiría una afectación a recursos de deuda pública de la Nación como son los derivados de la ejecución del bono

pensional, y a su vez resultaría alterador de las operaciones, actos y contratos celebrados entre aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas que intervinieron en la consolidación y rendimientos de los capitales a partir de los cuales se financia la pensión del demandante.

Tampoco puede pasarse por alto el hecho de que el demandante alcanzó a pensionarse bajo una modalidad anticipada que le permitió acceder a su pensión incluso antes de cumplir 55 años de edad, circunstancia que impide que se declare la ineficacia, en tanto se afectarían significativamente los recursos de libre disponibilidad en el régimen de prima media con prestación definida, al existir un desgaste financiero por la financiación de la prestación que se ha dado al demandante de su pensión desde una fecha anterior a la edad.

El actor pretende que se declare la ineficacia luego de haber alcanzado el derecho pensional, incluso beneficiándose de las reglas de capitalización que rigen el régimen de ahorro individual con solidaridad, al haber arribado a disfrutar de la pensión de vejez desde incluso antes de cumplir los 55 años de edad, pasando por alto que la Corte Constitucional ha dicho desde la sentencia C-841 de 2003 que, *“permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado”*.

Ahora, si se analiza la situación del señor WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO, de cara al artículo 2.341 del Código Civil, que establece que quien genera un daño debe repararlo, a efectos de auscultar la eventual causación de perjuicios irrogados por PROTECCIÓN S.A., al haberle hecho incurrir en error por ausencia de asesoría, tales perjuicios tampoco se encuentran debidamente acreditados, sobre todo si se tiene en cuenta que –tal y como lo ha destacado esta sala- el actor accedió a la pensión de vejez cinco años de cumplir los 60 años, que hubiera sido la edad en la cual hubiese

arribado a su derecho pensional como beneficiario del régimen de transición pensional.

Con todo, siguiendo la tesis de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 373 de 2021, es claro que se configuró la prescripción, teniendo en cuenta –tal y como lo argumentó el A quo-, que han pasado más de 17 años después del actor haber alcanzado la pensión, teniendo en cuenta que el término de prescripción de la acción para reclamar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora del fondo de pensiones por la falta de información en el traslado de régimen pensional, se cuenta desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, status que el señor TABARES CUERVO alcanzó desde septiembre de 2001.

A partir de las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia **será CONFIRMADA**, debiéndose condenar al señor WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO a pagar costas procesales de segunda instancia a COLPENSIONES y a PROTECCIÓN S.A., al haber resultado vencido en el recurso. Agencias en derecho: Medio salario mínimo para el año 2021 en favor de cada una de las entidades demandadas.

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** íntegramente, aunque por razones distintas, la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas que se conoce en Apelación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO: CONDENAR** al señor **WILLIAM DE JESÚS TABARES CUERVO** a pagar costas procesales de segunda instancia a **COLPENSIONES** y a **PROTECCIÓN S.A.** Agencias en derecho: Medio salario mínimo para el año 2021 en favor de cada una de las entidades demandadas.

**TERCERO: SE ORDENA** la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

**Los Magistrados:**

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 106 del 21 de junio de 2021.

**Consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>